

Señora
JUEZ QUINCE (15) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E.S.D

REF:

PROCESO: VERBAL DE MAYOR CUANTÍA
DEMANDANTE: ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.,
"COLBOLETOS"
DEMANDADOS: AMÉRICA DE CALI S.A., EN REORGANIZACIÓN.
Radicación No. 76001310301520180012000

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, titular de la Tarjeta Profesional N° 39.116 del C. S. de la J, obrando como apoderado especial de **ESPECTACULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. "COLBOLETOS"**, de manera respetuosa, estando dentro del término legal correspondiente, procedo a sustentar el recurso de **APELACIÓN**, contra el auto notificado en estado No. 015 del 11 de febrero de 2020 del honorable Despacho, que decidió entre otras, correr traslado frente al recurso de apelación presentado por cada una de las partes que conforman la litis.

FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR PARTE DE LA SOCIEDAD AMERICA DE CALI S.A. "En Reorganización".

Resalto que no le asiste razón al apoderado de la Sociedad AMERICA DE CALI S.A. "En Reorganización", y por tanto no se podría dar cabida a los argumentos presentados, toda vez que ninguna de las situaciones expuestas se soportan sobre evidencia o supuestos fácticos, que efectivamente demostrasen el presunto perjuicio que se pudiese llegar acometer con el decreto de la medida cautelar dispuesta por el Despacho.

Cabe advertir que la inscripción de la demanda como medida procesal, no impide o limita "per se" el desarrollo del objeto social de la Compañía, situación que procura injustificadamente el apoderado de la parte exponer, a fin de obtener el levantamiento de la medida dispuesta correctamente por el Juez de instancia.

Así mismo, en lo que refiere a la fijación de la cuantía, es claro que ésta se determina es en razón a los posibles perjuicios que se pudieren llegar a causar con la práctica de la medida y no simplemente con relación al costo o avalúo del bien afectado.

Adicionalmente y como bien lo ha dispuesto la señora Juez, la inscripción de la demanda, es una medida que se toma en razón a la valoración de un derecho serio y verosímil "*fumus bonis iuris*" que sin constituir ello un prejuzgamiento, sí obliga a un test preliminar que soporte unas pretensiones fundadas plasmadas en el escrito de demanda.

**REITERACIÓN DE LOS ARGUMENTOS QUE SIRVIERON COMO FUNDAMENTOS
FÁCTICOS Y JURÍDICOS PARA EL RECURSO DE APELACIÓN**

1. Como se señaló en líneas preliminares, auto notificado en estado No. 083 del 24 de mayo de 2019, la señora Juez 15 Civil del Circuito en el numeral 3 dispuso lo siguiente:

"(...)

3°. Considerando el despacho procedente la medida cautelar solicitada, se ordena PRESETE el actor en el término de cinco (05) días, CAUCIÓN en póliza de Compañía de Seguros por la suma de \$2.000.000.000 (Dos mil millones de pesos m/te), que garantice el valor de los perjuicios que se llegaren a ocasionar con la medida (num.2 art. 590 CGP).

(...)"

2. Al respecto, se aclara para todos los efectos del presente recurso de reposición y en subsidio apelación, que el motivo de la inconformidad reside exclusivamente en la cuantía que el honorable Despacho ha tasado como suma para prestar la caución judicial, y no precisamente sobre la decisión de fondo proferido por su señoría, pues existe conformidad y acuerdo con la decisión de decreto de la medida cautelar, más no con el valor que se ha fijado para la particular, toda vez que resulta una suma considerablemente onerosa que desnaturaliza entre otras el objetivo de la figura cautelar citada.
3. Como sustento de la posición que presente mediante el presente escrito, respetuosamente procedo a transcribir lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 590 del CGP:

"Artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

- 1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:*

(...)

*b) **La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado**, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de **responsabilidad civil contractual** o extracontractual. (Subrayado y negrita, fuera del texto original de la demanda)*

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.

(...)

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia.

(...)" (Subrayado y negrita, fuera del texto original)

4. Como es de conocimiento de este Despacho, en el presente caso, ciertamente mi procurada ha solicitado el decreto de una medida cautelar específica en sede del presente proceso declarativo, amparada en lo dispuesto por el literal c del numeral 2 del artículo 590 del CGP, consistente en la inscripción de la demanda en algunos de los bienes de propiedad del demandado que estén sujetos a registro, específicamente de las marcas mixtas denominadas AMÉRICA y AMERICA -1927; solicitud que entonces fue despachada favorablemente, no obstante en tal decisión, se desconoció la regla que regula la tasación de la cuantía de la que habla igualmente el artículo 590 del CGP.
5. Puntualmente el numeral 2 del mencionado artículo 590 del CGP, señala que para que sea procedente el decreto de medidas cautelares en los procesos declarativos, el demandante que en este caso, es mi procurada, COLBOLETOS, debe prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, las cuales en el litigio que hoy nos convoca ascienden a CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIÚN PESOS (\$5.517.599.021); situación que de manera concluyente nos obliga a solicitar la revocatoria de la cifra tasada como valor para prestar causación judicial, si nos atenemos a lo taxativamente expresado por esta norma procesal.
6. Retomando lo dispuesto por el numeral 3 del auto notificado en estado No. 083 del 24 de mayo de 2019, es claro que una caución judicial del monto exigido excede lo permitido por la norma, ya que si se realiza un ejercicio aritmético simple auscultando su porcentaje correspondiente, tenemos que \$2.000.000.000 equivalen al 36,24%; razón suficiente para acceder favorablemente a mi petición de revocatoria,
7. De otro lado, resulta pertinente señalar al Despacho que una medida cautelar como la solicitada y decretada no conlleva en sí un detrimento patrimonial a la demandada o una privación de lucro mientras que la medida se encuentre practicada, razón por la cual no habría razón jurídica y/o económica para que la tasación del valor de la mentada caución judicial ascendiera a la cifra deprecada por el Despacho, cuando lo único cierto y apreciable de la solicitud que hace mi representada, es garantizar su debido proceso y acceso material a la justicia en el presente litigio; ya que como lo ha precisado la jurisprudencia, ésta cautela tiene el objetivo de advertir a los adquirentes del bien sobre el cual recae la medida, que éste o su dueño se halla

en litigio, debiendo entonces el tercero interesado o interviniente, atenerse a los resultados de la sentencia que en él se profiera.¹

8. De igual forma y como complemento de lo dicho, considero justo traer a colación el siguiente extracto:

"(...)

Por su naturaleza, la inscripción no sustrae el terreno del comercio, ni produce los efectos del secuestro, como la de impedirle a su propietario u ocupante disponer materialmente de él, pero tiene la fuerza de aniquilar todas las anotaciones realizadas con posterioridad a su inscripción, que conlleven transferencias de dominio, gravámenes, y limitaciones a la propiedad; claro, siempre y cuando, en el asunto donde se profirió la misma, se dicte fallo estimatorio de la pretensión que implique, necesariamente, cambio, variación o alteración en la titularidad de un derecho real principal u otro accesorio sobre el inmueble, pues de ocurrir lo contrario, de nada serviría. (Subrayado y negrita, fuera del texto original)

Esas características fueron las fijadas por el artículo 42 de la Ley 57 de 1887, el cual prescribía: "Todo Juez ante quien se presente una demanda civil ordinaria sobre la propiedad de un inmueble, ordenará que se tome razón de aquélla en el Libro de Registro de demandas civiles, luego que el demandado haya sido notificado de la demanda".

Lo anterior obliga al juzgador que decide sobre la anotada cautela, a realizar una valoración, *prima facie*, de las respectivas súplicas a fin de otorgarles *fumus boni iuris*, que según el numeral 1º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, hoy previsto en los cánones 590 (literal a) del numeral 1º) y 591 del Código General del Proceso conlleva constatar una hipotética amenaza al "dominio u otra [prerrogativa] real principal o una universalidad de bienes", o en otras palabras, suponer cuál sería la suerte jurídica del predio en caso de prosperar el libelo genitor.

(...) "

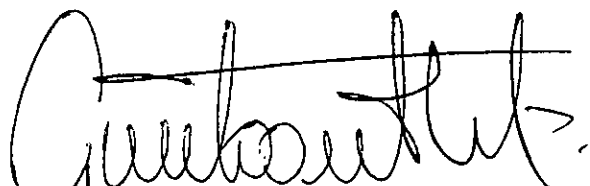
9. Finalmente, como bien es posible observar, el auto que ha resuelto el recurso de reposición interpuesto dentro del término, no ha tenido a cuenta ninguna de las consideraciones expuestas e incluso ha sobrepasado los límites que textualmente expone el artículo 590, Numeral 2, sin brindar mayor justificación sobre los elementos que han sido sujetos de valoración judicial, para efectos de determinar la cuantía para la tasación de la caución, lo cual ha sido desconocido por parte de la señora Juez dentro de la providencia objeto del recurso.
10. Por consiguiente, deviene con toda certeza que no es posible que mi procurada deba prestar caución por una suma de dinero como la ordenada por el honorable Despacho si se tienen en cuenta las disposiciones procesales y sustantivas que se acaban de exponer, debiéndose revocar por parte del Juez de segunda instancia la providencia recurrida bajo el recurso de apelación invocado.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. SC19903-2017. Radicación: 73268-31-03-002-2011-00145-01. Noviembre 29 de 2017. Bogotá D.C. Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona.

PETICIÓN

PRIMERA. Conforme lo expuesto, se ruega al señor Juez de segunda instancia, revocar el auto recurrido mediante recurso de apelación y proferido por parte del Juzgado 15 Civil del Circuito, solo en lo que tiene que ver con la cuantía estimada para prestar caución judicial, y en su lugar fije un valor que no sea superior al 20% de las pretensiones que mi procurada. En igual sentido se RUEGA dejar incólume el aparte del numeral 3° del Auto objeto de impugnación que decreta la medida cautelar solicitada por COLBOLETOS.

Cordialmente, de la señora Juez,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.R. No. 39.116 del C. S. J.


Señor
JUEZ QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA: VERBAL
DEMANDANTE: ESPECTACULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
COLBOLETOS
DEMANDADO: AMERICA DE CALI S.A. EN REORGANIZACION
RADICACION: 201800120

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, actuando en mi calidad de apoderado de los DEMANDANTES, dentro del proceso de la referencia, de manera respetuosa, me permito manifestar al Despacho que autorizo al señor BRYAN ANDRES SOTO CAVIEDES, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.927.699 expedida en Cali Valle, egresado de la universidad cooperativa de Colombia, para que pueda conocer y examinar los expedientes en los cuales actúo ya sea como representante de la parte actora o de la parte pasiva, quedando igualmente facultado para que retire documentos, avisos, citaciones, edictos, copias, despachos comisorios u oficios.

Renuncio a término de ejecutoria y auto que me fuera favorable.

Del señor Juez, Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.
T. P. No. 39.116 del C. S. de la J.



UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1830 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Acta Individual de Graduación No. 11-779-2019

PROGRAMA : DERECHO
CODIGO SNIES: 8894
FECHA GRADO: 24 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, CAMPUS CALI

En atención a que BRYAN ANDRES SOTO CAVIEDES con Cédula de Ciudadanía No. 1.143.927.699 de Cali cumplió todos los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el título de: ABOGADO.

Lo anterior, atendiendo la aprobación del Consejo Académico del Campus Cali, mediante acta No 011 en sesión del día 04 de septiembre de 2019.

Para constancia se citan en este título las autoridades competentes: Rector(a), Director(a) de Campus, Decano(a) facultad y Secretario(a) General de la Universidad, así:

Rector(a): MARITZA RONDON RANGEL
Director(a) de Campus: JUAN CARLOS FLOREZ BURITICA
Decano(a) facultad: JUAN FELIPE GONZALEZ RIOS
Secretario(a) General: GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS

Se expide la presente Acta en la ciudad de Cali el día 24 DE OCTUBRE DE 2019

Gloria Patricia Rave J
GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretario(a) General



Dr. CARLOS ARTURO COBO GARCIA
Abogado Asesor
Avenida 3 Norte # 8 N – 24 Of. 413 Cali
Teléfonos 8835886/87 fax 6601424 Celufijo 315 5502174
coboasoc@cablenet.co

Cali, 13 de febrero de 2020

Señor:
Juez Quince (15º) Civil del Circuito de Cali
E. S. D.

16.820.403
APG
FEB 14 2020 - 115

Referencia: Proceso Ordinario
Demandante: ESPECTACULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA SAS
COLBOLETOS
Demandado: CORPORACION DEPORTIVA AMERICA DE CALI
Radicación: 2018 - 062120
Asunto: Autorización

Carlos Arturo Cobo García, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.820.403 de Jamundí (Valle), con Tarjeta Profesional No. 38.081 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de la parte DEMANDADA, por medio del presente escrito me permito autorizar a la Doctora **Yanires Cervantes Polo**, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.898.572 de Soplaviento (Bol), y con Tarjeta Profesional de Abogada No. 282.578 del C. S. de la J., para que revise el proceso de la referencia.

La señora Yanires Cervantes Polo, queda facultada para retirar en mi nombre y bajo mi responsabilidad los oficios, despachos y cualquier otro documento resultante del proceso de la referencia, y que le interesen a la parte que represento.

Del Señor Juez,

Carlos Arturo Cobo García
C.C. No. 16.820.403 de Jamundí (Valle)
T. P. No. 38.081 del C. S. de la J.



Dr. Carlos Arturo Cobo García
Abogado Asesor
Avenida 3 Norte # 8 N - 24 Of. 413 Cali
Teléfonos 8835886/87 fax 6601424 Celufijo 300 7774259
cobogarc@cali.net.co

Cali, febrero 13 de 2019

Señora
Juez Quince Civil del Circuito de Cali
E. S. D.

Referencia: Proceso.
Demandante: Colboletos S.A.S.
Demandado: América de Cali S.A. "En Reorganización"
Asunto: Sustento apelación; Numeral 3 del auto 0398
Radicado: 2018-00120

En calidad conocida de auto, a usted me dirijo a fin de sustento de la apelación contra del numeral 3 del auto 0398 del 20 de mayo del año en curso, a fin de que el A-quem revoque la decisión atacada, para lo cual le indico:

Como lo manifiesta el despacho en el auto 0826 del 7 de febrero del año en curso, notificado por estados el 11 de los corrientes, el Código General del Proceso, en el numeral 2 del Artículo 590, al hacer referencia a Medidas cautelares en procesos declarativos

"2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia".

Por ello, para que Colboletos S.A.S pudiera solicitar la medida cautelar que aquí se impugna, debió acreditar principalmente dos cosas: i) la legitimidad y el interés para solicitar la medida, y ii) la existencia de la amenaza o vulneración. Tratándose de este ultimo requisito, Colboletos S.A.S debió explicar con suficiencia, y desde el momento mismo de su solicitud, por qué su petición está prevalida de la apariencia de buen derecho, a efecto de que el juez haga la ponderación necesaria para su decreto.

Es por ello que, al atacar el numeral 3 del auto 0398 del 20 de mayo de 2019, se solicitó que se negara por improcedente la solicitud de medidas cautelares solicitada por la parte actora, quien soporta su pedimento en que mi cliente se encuentra en desarrollo de acuerdo de reorganización empresarial de que trata la Ley 1116 de 2006,

proceso concursal que concluyó con un Acuerdo con los acreedores de mi cliente, y que fue confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades, (radicación N°38719). Tal providencia que aprobó el Acuerdo de Reorganización es un fallo judicial que pone fin al conflicto derivado del concurso de acreedores del deudor insolvente, decisión contra la cual no procede recurso alguno, como lo indica el Artículo 35, inciso final, Ley 1116 de 2006.

Esa sentencia judicial contenida en el Acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades vincula jurídicamente al América de Cali S.A. “En Reorganización”, como deudor y a todos sus acreedores, incluidos a los presentes, ausentes y disidentes. Adicionalmente, surte efectos frente a los terceros en general, con efectos de cosa juzgada *erga omne*, hecho este que incluiría al demandante Colboletos S.A.S., en el hipotético caso en que saliera abante las pretensiones de la demanda.

Conforme al texto del acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades, el mismo tiene una vigencia hasta el 5 de noviembre de 2035 o hasta cuando los Acreedores decidan su terminación anticipada en los términos previstos en el Acuerdo.

Por ello, si nos ubicáramos en el campo hipotético de que las pretensiones de la demanda primigenia propuestas por Colboletos S.A.S. fueran acogidas por el despacho, tal condena tendría la calidad de crédito de 5ª categoría (quirografarios) consignado en el acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades, e indefectiblemente se le debería dar aplicación a lo ordenado en los incisos 2º y 3º del artículo 25 de la Ley 1116 de 2006, que a la letra señala que:

“Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del acuerdo, por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización, no constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos previstos en el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el evento de estar cancelados los de su categoría, procederá su pago, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo.” (Negrilla y línea de subrayo por fuera del texto original)

Tratándose de crédito de 5ª categoría (quirografarios) el acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades señala:

**“CAPITULO VI
PAGO DE CREDITOS DE ACREEDORES QUIROGRAFARIOS
LAS OBLIGACIONES CON ACREEDORES QUIROGRAFICOS
señalados en el ANEXO de este ACUERDO, se pagarán de la**

siguiente manera:

Dentro del año 2033, se pagará el veinte por ciento (20%) del capital en una cuota el día 5 de noviembre de 2033

Dentro del año 2034, se pagará el veinte por ciento (20%) del capital en una cuota el día 5 de noviembre de 2034

Dentro del año 2035, se pagará el veinte por ciento (20%) del capital en una cuota el día 5 de noviembre de 2035”

Por ello, para Colboletos S.A.S. no sería inaplicable el Artículo 590 del C.G.P., en lo que hace referencia solicitar embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda de los bienes objeto del proceso, si llegaran a prosperar sus pretensiones en el presente asunto, ya que se concretarse dicha petición (embargo y secuestro) se estaría atentando contra la prenda general de los acreedores de la sociedad “América de Cali S.A. “En Reorganización” y el interés de los acreedores intervinientes en el acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades

Es por ello que, al oponernos a dicha inscripción de la demanda, hemos hablado de buena fe procesal, ya que para que Colboletos S.A.S. pudiera hacer la solicitud de medidas cautelares que ahora se pretende, debe de partir de “la apariencia de buen derecho”, ya que, no solo debe acreditar su interés y la existencia de la amenaza o vulneración que pretende contrarrestar con la medida, hecho esta absolutamente inexistente, ya que las resultas de este proceso, se deben someter a las condiciones y plazos del acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades.

La doctrina se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en *el fumus boni iuris y periculum in mora*. *El primero*, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la *posible existencia de un derecho*. *El segundo*, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de *un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho* [...]» (Negritas fuera del texto).

Además de lo anterior, se solicitó que, de no ser procedente los argumentos anteriormente citados, se debía ajustar el monto de la caución que debe prestar la parte actora, aproximándolo a un valor que no puede ser inferior a los \$40.000'000.000.00, con el cual se garantizaría los perjuicios que se pudieran generar a mi cliente, más aun cuando existe la posibilidad de recibir la inyección de capitales frescos, aportados por inversionistas, que al encontrar una anotación en los derechos marcarios como la que se pretende de seguro no realizarían dicha vinculación.

Debe entender el Juzgador que la afectación de unas marcas o de cualquier otro derecho que posea la sociedad “América de Cali S.A.

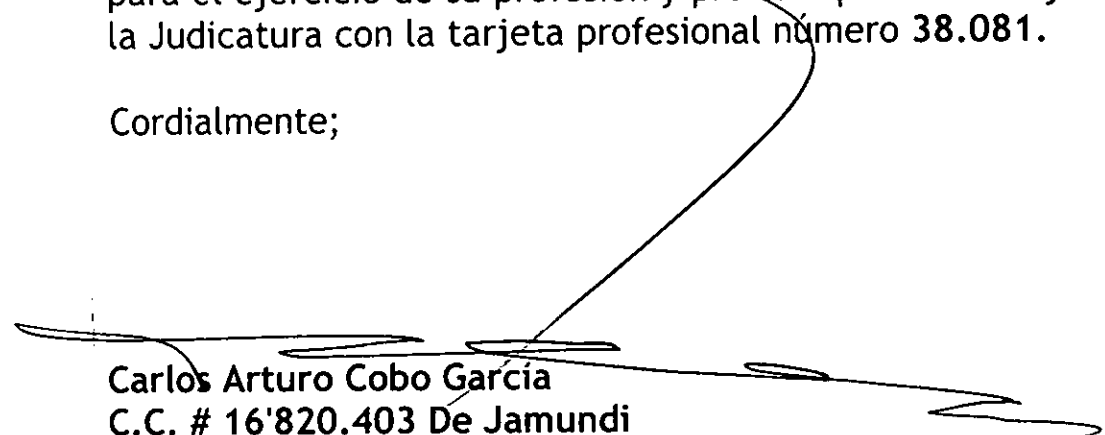
“En Reorganización” tienen un inmenso valor no solo económico que (se estima en superior a 80 Millones de dólares es decir, más de \$240.000'000.000.00 millones de pesos), sino el valor sentimental que tiene para la ciudad de Cali, lo que derivaría que la medida solicitada es absolutamente desproporcionada, así ello no implique la salida del comercio de dichos derechos marcarios, generándose a mi cliente unos cuantiosos perjuicios que sin duda superan con creces la suma que se pretende garantizar con la caución ordenada por el despacho. Mantenerse la decisión del despacho, en ordenar la medida cautelar solicitada, previo la presentación de una caución por la suma de \$2.000'000.000.00, no solo hace que la solicitud de la parte actora está en abierta contravía con la buena fe procesal, sino que además está desconociendo que, por esta misma cuerda procesal se está tramitando una demanda de reconvención cuya cuantía es igual o superior a la demanda primigenia.

Es que, al fijar el monto de la caución, el juzgador debe estudiar el objeto del litigio (Demanda y reconvención) y su valor, no solo intrínseco, sino también de los efectos de apresurarse a aceptar exigencias en causas infundadas, y el precedente que ello genera en la continuidad de la sociedad **“América de Cali S.A. “En Reorganización”**.

Anexo: Copia del del acuerdo de Reorganización confirmado mediante Auto N- 2014-01-510380 del 13/11/2014, por la Superintendencia de Sociedades.

Suscribe este escrito, **Carlos Arturo Cobo García**, identificado con la cédula de ciudadanía **16'820.403** de Jamundí, abogado facultado para el ejercicio de su profesión y provisto por el Consejo Superior de la Judicatura con la tarjeta profesional número **38.081**.

Cordialmente;



Carlos Arturo Cobo García
C.C. # 16'820.403 De Jamundi
T.P. # 38.081 Del C.S.J.